

S.J.- 31/2026

Se ha recibido en esta Abogacía General una solicitud de informe, remitida por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, en relación con un **proyecto de modificación número 1 del contrato titulado “Servicio de transporte con vehículos adaptados y conductores para prestar información y atención presencial al ciudadano en municipios de la Comunidad de Madrid”**.

A la vista de los antecedentes remitidos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.1.h) de la Ley 3/1999, de 30 de marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid y en el artículo 191 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, tenemos el honor de emitir el siguiente:

INFORME

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - Con fecha 19 de septiembre de 2024 se adjudicó a IRISBUS, S.A.U. (en adelante, la adjudicataria) el contrato titulado “*Servicio de transporte con vehículos adaptados y conductores para prestar información y atención presencial al ciudadano en municipios de la Comunidad de Madrid*”. El contrato fue formalizado en fecha 17 de octubre de 2024.

SEGUNDO. - La modificación proyectada obedece a la necesidad de ampliar la prestación del servicio de información y atención al ciudadano objeto del contrato a dieciséis nuevos



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0962704165758611895374**

municipios con una población superior a los 20.000 habitantes e inferior a 65.000, lo que exige incorporar un vehículo adicional para la prestación de dicho servicio.

TERCERO. - La modificación pretendida supone, según se indica en la memoria justificativa, un incremento de un 3,68 por 100, respecto del precio de adjudicación del contrato.

CUARTO. - Con fecha 10 de abril de 2026, tuvo entrada en el Servicio Jurídico en la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local una petición de informe, remitida por la Secretaría General Técnica, en relación con la modificación del contrato referenciado.

A dicha petición se acompaña la siguiente documentación:

- Pliego de cláusulas administrativas particulares.
- Pliego de prescripciones técnicas.
- Resguardo de garantía en aval, de fecha 28 de agosto de 2024, por importe de 125.484,45 euros.
- Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, de fecha 19 de septiembre de 2024, por la que se adjudica el contrato a IRIBUS, S.A.U.
- Contrato formalizado en fecha 17 de octubre de 2024.
- Escrito de la Dirección General de Atención al Ciudadano y Transparencia, de fecha 6 de abril de 2026, por el que se comunica a la adjudicataria la propuesta de primera modificación del contrato y se le concede trámite de audiencia.



- Escrito de la Dirección General de Atención al Ciudadano y Transparencia, de fecha 12 de febrero de 2026, por el que se comunica a la adjudicataria la propuesta de modificación del contrato y se le concede trámite de audiencia, firmado por el representante de la adjudicataria en fecha 6 de abril de 2026.
- Propuesta de modificación del contrato, de fecha 8 de abril de 2026, de la Dirección General de Atención al Ciudadano y Transparencia.
- Memoria justificativa, de fecha 8 de abril de 2026, de la Dirección General de Atención al Ciudadano y Transparencia.
- Proyecto de Orden de primera modificación del contrato.
- Proyecto de notificación a la adjudicataria de la Orden de primera modificación del contrato.
- Proyecto de documento de formalización de la primera modificación del contrato.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA. – La normativa aplicable a la modificación del contrato de servicios objeto de informe, viene dada por lo dispuesto en los artículos 190 a 191 y 203 a 207, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP).

El artículo 190 de la LCSP consagra, entre las prerrogativas de la Administración en materia de contratación pública, la potestad de modificación del contrato.

Asimismo, la jurisprudencia ha señalado que el llamado *ius variandi*, esto es, el poder de la Administración de modificación unilateral del contrato, es una de las más trascendentales características del contrato administrativo, en cuanto que implica una excepción a un principio básico en materia contractual, cual es el de *pacta sunt servanda* (Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de julio de 1987).

Como ha recordado el Consejo de Estado en numerosos dictámenes, entre otros en el número 3371/1996, de 28 de noviembre, el sometimiento a cauces estrictos del *ius variandi* de la Administración tiene su razón de ser, precisamente, en la salvaguarda del principio de concurrencia y licitación pública que preside la contratación administrativa. En este sentido, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en su informe 48/1995, de 21 de diciembre, recoge la doctrina de la mutabilidad de los contratos, si bien sometida a ciertos límites para que no puedan ser alteradas las bases y los criterios a los que responde la adjudicación de los contratos mediante el sistema de licitación pública.

SEGUNDA. - El artículo 203 de la LCSP supedita el ejercicio del *ius variandi* por la administración a la concurrencia de razones de interés público, en los casos y en la forma previstos en los artículos 204 y siguientes de la LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 207.

El apartado 3 del artículo 203 de la LCSP establece que la modificación del contrato deberá formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de dicha norma.

El artículo 203 distingue los supuestos en que los pliegos hayan previsto la modificación del contrato, de aquéllos otros en los que no concurra tal circunstancia, en cuyo caso, la modificación deberá ajustarse a lo previsto en el artículo 205.

Para los supuestos en que la modificación esté contemplada en los pliegos, el artículo 204 de la LCSP establece:



“1. Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad, en la forma y con el contenido siguientes:

- a) La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, precisa e inequívoca.*
- b) Asimismo, en lo que respecta a su contenido, la cláusula de modificación deberá precisar con el detalle suficiente: su alcance, límites y naturaleza; las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva; y el procedimiento que haya de seguirse para realizar la modificación. La cláusula de modificación establecerá, asimismo, que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.*

La formulación y contenido de la cláusula de modificación deberá ser tal que en todo caso permita a los candidatos y licitadores comprender su alcance exacto e interpretarla de la misma forma y que, por otra parte, permita al órgano de contratación comprobar efectivamente el cumplimiento por parte de los primeros de las condiciones de aptitud exigidas y valorar correctamente las ofertas presentadas por estos.

2. En ningún caso los órganos de contratación podrán prever en el pliego de cláusulas administrativas particulares modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del contrato inicial. En todo caso, se entenderá que se altera esta si se sustituyen las obras, los suministros o los servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual”.

Respecto al procedimiento a seguir para la modificación, cabe señalar que el artículo 191, apartado 1, de la LCSP, dispone que en los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a la interpretación, modificación y resolución del contrato deberá darse audiencia al contratista.



TERCERA. –Entrando en el examen de la modificación del contrato sometida a informe, se ha de señalar que el apartado 22, de la cláusula 1, del pliego de cláusulas administrativas particulares concreta los supuestos en que podrá producirse la modificación, en los siguientes términos:

“22.- Modificaciones previstas del contrato: SÍ

Condiciones en que podrán efectuarse: Modificaciones derivadas de la planificación de las actuaciones de atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid que impliquen la necesidad de atender municipios en los que anteriormente no hubiera sido necesario.

Alcance, límites y naturaleza de las modificaciones:

- 1) Incremento o disminución de horas de prestación de servicio o un aumento de kilómetros, que superen el total contemplado en el contrato, y que conlleven un gasto no previsto en carburante o en traslados.*
- 2) Incremento o disminución de vehículos y del equipamiento de los vehículos.*

Porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar: 20 %”.

En particular, la modificación del contrato tiene por objeto la ampliación del servicio de información y atención al ciudadano en dieciséis nuevos municipios, para lo que se requiere la incorporación de un vehículo adicional.

Por tanto, cabe afirmar que la causa que justifica la modificación se acomoda a las previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares –atención a nuevos municipios que requiere un incremento de vehículos-.

Asimismo, se ha de indicar que la modificación que se pretende implica una alteración en el precio que se incrementa, según se indica en la propuesta de modificación y en la memoria justificativa, en un 3,68 por 100, por lo que se respeta el porcentaje del precio del contrato al que como máximo puede afectar la modificación.



Por otra parte, deberá tenerse en cuenta que, conforme al artículo 109, apartado 3, de la LCSP, “cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación”. En este sentido, el proyecto de Orden de modificación del contrato contempla la ampliación de la garantía definitiva.

Desde el punto de vista procedimental, el artículo 191 de la LCSP exige que se dé audiencia al contratista. Este requisito se ha cumplido en el presente expediente, dado que la adjudicataria suscribió el escrito en el que se indicaban las condiciones de la modificación.

En virtud de cuanto antecede, se formula la siguiente

CONCLUSIÓN

Se informa favorablemente el proyecto de modificación número 1 del contrato titulado “*Servicio de transporte con vehículos adaptados y conductores para prestar información y atención presencial al ciudadano en municipios de la Comunidad de Madrid*”.

Es cuanto se tiene el honor de informar. No obstante, V.I. resolverá.

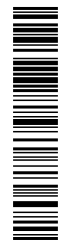
Madrid, a fecha de firma.

La Letrada-Jefe

Firmado digitalmente por: ALVAREZ HERRANZ BEATRIZ
Fecha: 2026.04.14 10:33

Beatriz Álvarez Herranz

**ILMA. SRA. SECRETARIA GENERAL TÉCNICA. CONSEJERÍA DE
PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL. -**



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0962704165758611895374**